

RADICALES, DEMOPROGRESISTAS Y ANTIPERSONALISTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN EN LA SANTA FE DE ENTREGUERRAS*

Darío Macor

*Director del Programa de Estudios Interdisciplinarios de Historia
Social, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.*

Resumen:

El trabajo centraliza su análisis en el funcionamiento del sistema político en la provincia de Santa Fe, Argentina, en el período de entreguerras y más específicamente en los años treinta, cuando las transformaciones que se producen a nivel estatal y en el funcionamiento de la democracia electoral, constituyen un escenario significativo para el análisis de los distintos actores políticos y los horizontes con que cada uno de ellos piensa la política y los roles de "oficialismo" y "oposición" que en diferentes momentos les toca ejercer.

Se considera especialmente a tres actores: la Democracia Progresista, que gobierna la provincia en la primera mitad de la década del treinta; el Radicalismo Antipersonalista (iriondismo), que gobierna en la segunda mitad; y el Radicalismo Comité Nacional, que elabora diferentes estrategias para un sostenido rol opositor.

Introducción.

El objetivo del presente trabajo es analizar el funcionamiento del sistema político en la provincia de Santa Fe, Argentina, en los años treinta, atendiendo a los roles desempeñados desde el gobierno y la oposición por los tres partidos

* Trabajo originalmente presentado en el «III Congreso Nacional de Ciencia Política: *Democracia, reforma económica y cuestión social*. Sociedad Argentina de Análisis Político, Mar del Plata, Argentina, 5 al 8 de noviembre de 1997.

de mayor significación electoral, el Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical de Santa Fe (UCR SF; en adelante: Antipersonalismo) y la Unión Cívica Radical Comité Nacional (UCR CN; en adelante: Radicalismo), y el impacto que este desempeño tiene en el orden interno a cada fuerza y en el entramado del sistema de partidos que conforman y que, a la vez, las constituye.

Extenderemos muy brevemente este análisis a las décadas anteriores, a fin de situar a cada partido que nos ocupa en su propia historicidad y aproximarnos a una caracterización del sistema de partidos que conforman y en el que maduran su identidad a partir de la instalación de la democracia electoral en 1912.

En nuestro análisis tendremos especialmente en cuenta el horizonte establecido por Angelo Panebianco para el análisis de los partidos políticos, sus hipótesis sobre la importancia que tienen para el desarrollo de toda agrupación partidaria la etapa originaria de la organización, el rol desempeñado como oposición o como gobierno y, fundamentalmente, el entorno, el “ambiente”, (Panebianco, 1995).

En el planteo de Panebianco, el ambiente —con el que los partidos establecen relaciones múltiples e interdependientes— es pasible de una división analítica considerando dos aspectos que influyen de manera diferente sobre los partidos: las *constricciones institucionales*, es decir el marco institucional que ordena el funcionamiento del régimen político y estructura los escenarios en que operan los partidos; y los *escenarios*, “ambientes *relevantes* en tanto ejercen una influencia más directa sobre los partidos... en los que se desarrollan las relaciones entre el partido y las demás organizaciones” y que “representan las distintas mesas de juego en las que el partido participa y de las que extrae... los recursos necesarios para su funcionamiento”.(Panebianco, 1995: 394) De la variedad de escenarios posibles de acuerdo a las características de cada sistema, hay dos que siempre tienen relevancia: el escenario electoral y el parlamentario.

Las características del ambiente —los niveles de incertidumbre, de complejidad, de estabilidad o inestabilidad, de hostilidad-liberalismo— influyen en el desarrollo partidario, aunque de manera diferente de acuerdo al grado de institucionalidad, las tradiciones partidarias y los recursos para distribuir con que cuenta la organización de acuerdo al lugar que ocupa en el sistema de poder. Un factor principal en la determinación del grado de complejidad del ambiente —y más precisamente del escenario electoral— está dado por las modalidades del enfrentamiento interpartidario. “Todo partido puede hallarse frente a los demás en una situación de oposición o de competencia. Hay oposición pero no competencia cuando los territorios de caza de los dos partidos no se superponen”. En este caso, y a diferencia de las situaciones competitivas, es posible una cierta superposición del electorado, pero la base electoral del partido que representa el dominio del que depende su identidad organizativa “no corre el riesgo de ser ‘capturada’ o ‘arañada’ por el partido adversario”. (Panebianco, 1995: 398)

En ese contexto adelantemos el núcleo central de nuestra hipótesis. En la década del treinta, el sistema político santafesino adquiere una mayor compleji-

dad ambiental en relación al período inmediato anterior. Esto es, tanto las constricciones institucionales como los distintos escenarios electorales, contribuyen a la constitución de un ambiente más complejo que impacta sobre el desarrollo de los diferentes partidos y la red interpartidaria.

En la primera mitad de la década, la mayor complejidad alcanzada, es fruto de una serie de procesos convergentes que terminan por modificar el panorama interpartidario, lo suficiente como para desplazar el escenario electoral a un punto en el que predomina la competencia interpartidaria antes que la oposición.

Estos procesos que se precipitan a partir de 1930, tanto en el orden nacional como en el provincial, potencian el nivel de incertidumbre en el escenario local ya que los partidos ingresan en una zona de competencia mayor a la existente antes del 30. Si bien desde 1912 puede apreciarse cierta superposición interpartidaria sobre algunas fracciones del electorado, en la década del treinta esto se potencia por la forma en que se constituyen los diferentes escenarios electorales. Las nuevas condiciones ambientales hacen posible que partidos adversarios amenacen capturar porciones importantes del electorado cautivo de las agrupaciones perjudicadas, rozando incluso esa "base electoral del partido que representa el dominio del que depende la identidad organizativa del partido" (Panebianco, 1995: 398).

A partir de 1937, las modificaciones que se producen en el Estado y en los distintos partidos, orientan las relaciones interpartidarias a una zona de menor densidad competitiva. A fines de la década el sistema de partidos recupera una estabilidad similar a la que tenía antes de 1930, aunque sobre bases bien diferentes, en un sistema político ahora matizado por el fraude electoral, el predominio de la élite conservadora que dispone de los recursos estatales de control, y la particular inserción de viejos y nuevos actores políticos.

La conformación inicial de la red interpartidaria, 1912-1930.

En el período 1912-1930 la red interpartidaria provincial se organiza sobre la base de la centralidad del radicalismo como partido de gobierno, con características de partido predominante y con una alta conflictividad interna que reproduce y multiplica el fenómeno partidario nacional del radicalismo.

El antipersonalismo puede remontar su origen a la etapa formativa del radicalismo local y los primeros enfrentamientos con la dirección nacional del partido, aunque la estructura organizativa sobre la que perfila su identidad en los años treinta, es resultado de la escisión partidaria de la década anterior. Estructura que le permitió entonces incorporar a fracciones del situacionismo provincial previo a 1912 que el PDP no había podido contener totalmente en su seno, aun cuando frente al radicalismo ocupara el lugar que el conservadorismo había dejado vacante.

El PDP tiene un recorrido complejo cuya descripción puede iluminar mejor las variaciones del sistema político en ese laboratorio de democratización del período 1912-1930 y los cambios y las permanencias vividas bajo la presión de la renovación ambiental.

Si en 1908, en sus comienzos como Liga del Sur, su horizonte de desarrollo se contiene en el marco regional, resulta bastante natural que ese pequeño partido del sur santafesino comience a construir sus primeros rasgos de identidad diferenciándose del situacionismo provincial, con quien tenía una clara situación de competitividad con respecto al mercado electoral.¹ Competitividad que era a la vez reforzada porque, al igual que su adversario situacionista, la Liga no ahorra recursos para diferenciarse del partido radical y sobre todo del yrigoyenismo que ya lo controlaba férreamente. A partir de su incorporación al partido demócrata progresista cuando éste se organiza en 1914, la constitución del enemigo se vuelve más precisa concentrándose en el partido radical con el que se enfrenta a nivel nacional y que desde 1912 se había transformado en el partido de gobierno en la provincia.

Desde 1912 y hasta 1930 sólo las crisis internas del radicalismo pueden amenazar su predominio local, mientras el PDP afirma sus rasgos de partido de oposición con una interesante participación parlamentaria, un fuerte peso en la zona sur de la provincia y un alto protagonismo en el debate político ideológico que caracteriza a la política santafesina en los primeros años de la década del veinte.

La red interpartidaria a lo largo del período 1912-30 es, en consecuencia, suficientemente estable como para no amenazar la situación privilegiada del partido radical. El PDP aparece más como un partido opositor que competitivo del partido de gobierno; sobre todo porque el sostenimiento en el tiempo de su rol como partido de oposición, termina por cristalizar social y espacialmente su dominio electoral. Se define así un escenario electoral con un grado de certidumbre relativamente alto, no tan afectado por la competencia interpartidaria como por la conflictividad y las permanentes divisiones del partido de gobierno.

El ambiente en la década del treinta.

Es conocido el proceso nacional a lo largo de la década del treinta, caracterizado por la reformulación del Estado y las transformaciones en el modelo de acumulación, bajo el impacto de las mutaciones del mercado mundial y sus efectos en la economía argentina.

Precisar el "ambiente" en la esfera provincial requiere de una operación que procese simultáneamente el contexto nacional, porque es en la particular forma en que se mezclan ambas esferas donde se define el impacto del ambiente en la vida partidaria. Cruzado por ambas esferas, el ambiente en el que se desarrolla

1. En este punto es interesante tener en cuenta que en sus comienzos la Liga del Sur no se presenta como un partido político —lo que está presente en la denominación adoptada— y que, por lo tanto, la adscripción a la misma podía no estar reñida con la participación en otras estructuras partidarias como las del situacionismo provincial. Es recién después de las primeras experiencias electorales que la Liga comienza a asumir un rol más competitivo con las demás fuerzas partidarias, definiéndose como una fuerza más en la contienda electoral. Cf. al respecto el planteo que en este sentido realiza Carlos Malamud (Malamud, 1997).

la política provincial en la década del treinta puede ordenarse en tres períodos: 1930-1935, 1935-37 y 1937-43.

El primer período con la centralidad del PDP como partido de gobierno, y considerando la intervención uriburista de 1930, las elecciones de 1931, el accionar de los partidos que nos ocupan en el escenario electoral y en sus roles como partido de gobierno y partidos de oposición, y el impacto que las condiciones del ambiente tienen para la vida interna partidaria.

El segundo, 1935-1937, es un período de transición en el que se producen los cambios que posibilitan el período siguiente y los primeros ajustes y since-ramientos interpartidarios con relación al período anterior. Se inicia con la intervención federal de octubre 1935, que clausura el gobierno demoprogresista y comienza a instalar en la provincia la maquinaria del fraude electoral para garantizar la conquista del Estado por el bloque justista local bajo el liderazgo de Manuel de Iriondo y la UCR Santa Fe, y culmina, precisamente, con la conquista del ejecutivo provincial por el iriondismo antipersonalista. En este marco, nos detendremos en el análisis de las elecciones de febrero de 1937, en las que aún sobreviven las características de competencia interpartidaria conformadas en el primer período, junto a elementos que serán constitutivos del último período, como las nuevas constricciones institucionales y los cambios que se producen en el comportamiento electoral del radicalismo nacional y local.

El tercer y último período está dominado por lo que llamaremos el *iriondismo*, fracción hegemónica del antipersonalismo local, que controla el gobierno provincial desde 1937 hasta el golpe militar de 1943, con el mismo Manuel de Iriondo como gobernador en los primeros años y con su discípulo Argonz como continuador en los años subsiguientes. En esta etapa son de fundamental importancia los cambios que se producen en el Estado y el impacto que esto trae aparejado en el partido de gobierno y en los partidos de oposición.

1. 1930-1935.

En este primer período el funcionamiento del sistema político y del sistema de partidos local tiene su eje en el PDP. Principalmente por su rol como partido de gobierno desde 1932 hasta 1935, pero también por las características de la intervención federal de 1930 y del escenario electoral de 1931, y por el impacto que la presión del ambiente nacional-provincial tiene en el comportamiento de los otros dos partidos: el radicalismo y el antipersonalismo.

Un punto de partida.

Es conocido el proceso que en el seno del gobierno militar instalado con el golpe de septiembre de 1930 lleva al ocaso del uriburismo y al traspaso del eje del poder nacional a las fuerzas aglutinadas en torno a Justo. Repasemos los puntos más salientes por su importancia para nuestro tema.

Desalojar a Yrigoyen del poder es un punto de coincidencia de fracciones políticas y militares diversas que se fortalece por el fácil éxito del movimiento militar, en sí mismo poco significativo. Mucho más difícil resultará, en cambio, transformar esa primera coincidencia en un proyecto político capaz de dotar al gobierno militar de la capacidad para reformular el desarrollo político.

El uriburismo pretende encabezar una revolución política a partir de la revisión de las disposiciones institucionales sobre las que se asentaba el sistema derrocado: el sistema electoral, con sus mecanismos de representación, y la misma Constitución Nacional. Su base de sustentación descansa fundamentalmente en el ejército como última fuente del orden jerárquico perdido. Pero este ejército tan imprescindible para el modelo propuesto por el uriburismo, es más permeable a la influencia de otras fuerzas políticas y sociales, que han apoyado la iniciativa militar de septiembre tras las huellas del general Justo.

Esas fuerzas del campo antiyrigoyenista, que permanecen al margen del reducido núcleo uriburista, han advertido rápidamente que los intentos de reformulación institucional y política del presidente provisional son innecesarios y hasta peligrosos. La presión ejercida por estos sectores para sostener la tradición institucional liberal, consolida la posición interna de la fracción justista en las fuerzas armadas y obliga al gobierno a organizar una primera salida electoral estructurada sobre la base de elecciones provinciales, para elegir gobernadores y legisladores. El mapa electoral establecía un recorrido que debía iniciarse en la provincia de Buenos Aires para continuar inmediatamente en Santa Fe, Corrientes y Córdoba.

Abandonados los experimentos institucionales extraños a la tradición liberal argentina, ahora se trata de vencer o eliminar políticamente a los radicales. En este punto, la estrategia de Uriburu tiene en Lisandro de la Torre a una pieza fundamental. El líder del PDP podría alcanzar la presidencia de la nación como producto de una coalición conservadora que se impondría en los hechos electorales mismos y gracias a la bendición presidencial. Ese futuro imaginado tiene, sin embargo, un punto de referencia fundamental para verificar su acierto en las primeras elecciones previstas para abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires.

Las elecciones bonaerenses se presentan en este contexto como una experiencia piloto donde el triunfo del conservadorismo debería ratificar la hipótesis que, dando cuenta del descrédito que acompañaba al radicalismo desde los tramos finales de su gobierno, aseguraba su decadencia electoral. Luego, las elecciones de la provincia de Santa Fe donde el peso del PDP habilitaba la presunción del triunfo, confirmarían una tendencia que se haría nacional y podría llevar a de la Torre a la presidencia de la nación.²

El triunfo radical en la experiencia piloto bonaerense revela la formidable capacidad electoral que aún mantenía el partido derrocado, a pesar de no contar con recursos estatales ni con la participación de su máximo líder. El revés

2 Hemos atendido esta relación del uriburismo con Lisandro de la Torre y su partido, en el análisis del PDP y su proyecto reformista en la primera mitad de la década (Macor, 1993).

electoral sufrido, decide la suerte del uriburismo y desarticula la estrategia del gobierno que se ve obligado al repliegue: las elecciones son anuladas, mientras se suspende el cronograma electoral previsto. Paralelamente, el bloque antiyri-goyenista se cohesiona aún más en un frente cuyo candidato natural es el general Justo, mientras Uriburu es relegado a un plano cada vez más secundario. A la vez, la capacidad electoral demostrada por el radicalismo, impone la necesidad de recurrir a la proscripción y el fraude para allanar el camino de Justo a la presidencia.

Como corolario de esta estrategia el gobierno proscribire la candidatura de Alvear, presentada por el radicalismo para las elecciones nacionales, y el radicalismo recurre entonces a una respuesta cara a su tradición, como es la abstención electoral. El escenario electoral termina así conformado por dos grandes bloques: el justista de la Concordancia por un lado, que aglutinaba fuerzas conservadoras con antipersonalistas y socialistas independientes; y la Alianza Civil, como bloque opositor, que reunía al PDP con el Partido Socialista.

En nuestra esfera provincial la división producida en el seno del gobierno nacional y las relaciones del PDP con el uriburismo tendrán un impacto considerable. En efecto, la intervención federal a la provincia establecida por el gobierno militar en 1930 tiene, desde sus comienzos, una actitud favorable al partido de la Torre, incorporando incluso algunos cuadros del demoprogrsismo al gobierno. El avance del justismo en el gobierno nacional no modifica, en lo sustancial, este cuadro de situación. La continuidad de la tendencia instalada por el uriburismo en la intervención y la seguridad de la Concordancia de contar con los distritos suficientes para alcanzar a nivel nacional colegio electoral propio, contribuyen a que la maquinaria del fraude electoral no esté presente en la provincia permitiendo un proceso electoral que se diferencia por su transparencia del resto de las provincias, más allá de la común proscripción del radicalismo.

Esta situación de excepción en el mapa de los distritos provinciales, le permite al PDP resolver a su favor las elecciones de fines de 1931 y llevar a su candidato, Luciano Molinas, a la gobernación. Veamos ahora el impacto de la nueva situación, tanto en el partido que gobernará la provincia hasta la intervención de 1935 como en el antipersonalismo y el radicalismo.

En torno a la democracia progresista.

Gracias a la abstención radical y a las características de la intervención federal en la provincia, la democracia progresista logra superar una tradición electoral que desde 1912 la condenaba a la minoría electoral y al estable ejercicio del rol de partido de oposición. Esta operación implica un desplazamiento que modifica su anterior estrategia de diferenciación en el mapa interpartidario. Si hasta 1930, el lugar del enemigo estaba ocupado centralmente por el radicalismo yri-goyenista, su rol a partir del escenario electoral de 1931, como oposición al bloque justista, la ubica en un punto diferente. Ahora la definición del enemigo pasa

por el antipersonalismo, y aunque nada en el discurso partidario parece modificar la dura reprobación al régimen yrigoyenista depuesto, las características del escenario electoral provocan un acercamiento con el partido de Yrigoyen que le permitirá una penetración en su base electoral tradicional cuando el radicalismo se refugie en la abstención electoral.

Con Luciano Molinas en la Casa Gris el PDP lleva adelante un programa ambicioso de democratización de las instituciones estatales. No atenderemos aquí especialmente al programa reformista del gobierno, tema que hemos trabajado en otras oportunidades (Macor, 1993 y 1995). Nos interesa sí detenernos en el impacto que tiene en el PDP la mayor complejidad ambiental que debe enfrentar en tanto partido de gobierno. Es oportuno recordar que estamos frente a un partido con una larga tradición como partido de oposición y una interesante experiencia legislativa, pero que nunca hasta entonces había alcanzado el control del Estado provincial.

La mayor complejidad ambiental para el PDP se debe a esta nueva situación de partido de gobierno, que debe atender ahora una múltiple cantidad de cuestiones, y se vuelve más densa por otras circunstancias concomitantes en la definición de ese nuevo ambiente.

Por un lado, el partido de gobierno debe enfrentar ahora en el manejo de los recursos estatales la tradicional conflictividad interregional de la provincia, que en su caso se ve agravada por la fuerte impronta regionalista de la tradición partidaria. La estrecha identificación partidaria con la región sur, y en especial con la ciudad de Rosario, podía canalizarse con relativa facilidad desde la oposición a los gobiernos conservadores primero y radicales después. Como partido de gobierno, en cambio, es necesario mantener un equilibrio para garantizar la gobernabilidad en el conjunto de la provincia; necesidad que no siempre es considerada por los legisladores oficialistas, demasiado acostumbrados a una acción parlamentaria opositora. Por otra parte, a tono con su predominio en la región sur, el bloque legislativo gubernamental tiene una clara mayoría de representantes de esa región con respecto al centro y al norte de la provincia. El poder ejecutivo, en cambio, está en manos de un hombre de la ciudad capital.³ A lo largo de los tres años de gobierno, las características de los enfrentamientos entre el ejecutivo y su bloque parlamentario, reflejan con claridad que la conflictividad interregional es una cuestión no saldada y que, por el contrario, el paso del rol de opositor al de gobierno trasladó el conflicto fronteras adentro del partido.

Un segundo elemento a considerar con relación a la mayor complejidad ambiental, está dado por el proyecto político que el gobierno demoprogresista pone en ejecución, que provoca una importante movilización de recursos humanos, políticos y sociales y contribuye a complejizar el ambiente. De acuerdo con

3. Atendiendo a la cuestión regional, la fórmula del PDP se completaba con una figura del sur, Isidro Carreras, que renunciará a la vice gobernación en el momento más duro del enfrentamiento entre el gobernador y los legisladores de su partido.

Panebianco, la mayor complejidad del ambiente impacta de manera desigual en las fuerzas partidarias, entre otras cosas de acuerdo a los niveles de institucionalidad de cada fuerza. La baja cohesión partidaria del PDP en el gobierno, determina su incapacidad para dominar al ambiente y, en consecuencia, es sometido al faccionalismo interno como consecuencia de la disparidad de reacciones frente a la nueva situación.

En este contexto, el programa de gobierno de Molinas se presenta como el intento más elaborado para enfrentar activamente la nueva situación ambiental y amortizar el impacto que acarreaba al partido el cambio de su tradicional rol de opositor por el de partido de gobierno. Sin embargo, el programa de gobierno no logró ordenar los conflictos intrapartidarios generados por la mayor complejidad ambiental. Por el contrario, a medida que el gobierno revelaba su incapacidad para someter al ambiente, el avance en el plan de reformas reforzaba la complejidad ambiental y alejaba aún más al partido oficial de la posibilidad de resolver exitosamente el dilema y bajar el nivel de incertidumbre.

El programa reformista debía enfrentarse con otros condicionantes, tan severos como los impuestos por el faccionalismo del partido de gobierno. Por un lado, la relación con el gobierno nacional, de por sí difícil en tanto se trata de la única provincia gobernada por la oposición, y en la que el plan reformista se presenta como una alternativa a la orientación del gobierno justista. Por otro, el rol asumido por los partidos opositores locales. En antipersonalismo, el justismo local, tiene una participación institucional en la legislatura provincial donde controla la minoría parlamentaria; sin embargo toda su política está cifrada en una oposición total que llega incluso a la obstrucción institucional con la manifiesta intención de provocar la intervención del gobierno nacional. El radicalismo, sin participación institucional como consecuencia de su abstención electoral, enfrenta en todo el período una fuerte hostilidad ambiental. En consecuencia su comportamiento político está sobredeterminado por la percepción del nivel de amenaza para la vida partidaria que significa esa hostilidad, tanto a nivel nacional como local, aunque —como veremos— en nuestro caso con características más complejas por la forma en que está conformado el mapa interpartidario.

Esta situación de externalidad institucionalidad del radicalismo yrigoyenista, terminaba de jaquear al proyecto reformista gubernamental. Si la oposición del antipersonalismo podía ser sorteada exitosamente por la reforma democratizadora, mucho más difícil le resultaba al gobierno conciliar ese proyecto reformista con la exclusión del radicalismo, gracias a la cual la democracia progresista había llegado a la Casa Gris. El radicalismo jugando "por afuera" del sistema, ponía en cuestión la legitimidad del gobierno y afectaba la movilización de recursos humanos que la reforma demandaba para alcanzar el éxito (Macor, 1995).

Esta suma de factores contribuyen a acrecentar el nivel de incertidumbre en la relación de los distintos partidos con el ambiente. No sólo para el partido de gobierno en el que el faccionalismo lleva a la fractura y, por momentos, a la parálisis institucional, sino también para el resto de las fuerzas políticas locales.

En torno al antipersonalismo.

El antipersonalismo, es uno de los resultados del quiebre que atraviesa al radicalismo santafesino en su conjunto, desde los orígenes partidarios. Sin embargo, alrededor del proceso electoral de 1928 termina de definir un perfil más claramente conservador, a partir de su enfrentamiento con el Yrigoyenismo y la asociación en el bloque de las derechas, lo que le permitió incorporar a sus filas a importantes sectores del antiguo situacionismo conservador.

Desde el golpe militar de 1930 y hasta las elecciones de fines de 1931 el antipersonalismo atravesará una situación ambigua. Por un lado, el rumbo que adopta el gobierno nacional a medida que se va conformando la Concordancia, le ofrece un cómodo lugar para su desarrollo en un ambiente favorable. Por las alternativas que se ofrecían a nivel nacional si Justo alcanzaba el gobierno, y por las que podían ofrecerse a nivel local si se controlaba la intervención provincial y desde allí el proceso electoral en el distrito. Sabemos que de estas expectativas sólo se verán satisfechas las que se corresponden a la esfera nacional.

Por otro lado, la reorganización del radicalismo nacional a partir de 1931, bajo la conducción del Alvear, presenta para el antipersonalismo una situación hostil para su crecimiento, en tanto la personalidad política del ex presidente volvía menos vulnerable al partido radical a las acusaciones de personalismo. Con ello, se reducían las posibilidades del antipersonalismo de ingresar al "territorio de caza" del radicalismo para capturar sectores de su electorado permeables al discurso antiyrigoyenista. Esta posibilidad para el antipersonalismo, de capturar cuadros políticos y base electoral del partido radical, era más atractiva en tanto en el seno del partido de Yrigoyen en el distrito provincial existía un bloque importante que no aceptaba su liderazgo personal.

En esta zona de conflicto con el partido radical, el antipersonalismo logrará capturar a un importante sector del radicalismo local (Ricardo Caballero y Juan Cepeda son las figuras más destacadas), que abandonan su partido para apoyar la candidatura de Justo a la presidencia y se incorporan a la UCR Santa Fe.⁴ Como puede apreciarse en la evolución posterior del radicalismo, las luchas internas entre yrigoyenistas y alvearistas no cesan a lo largo de la década, poniendo en evidencia la existencia de otros importantes sectores permeables al discurso antipersonalista que no pasaron la frontera en el 31 (Persello, 1996a y 1996b). En el cuadro de situación de 1931-32, la dirección alvearista del partido a nivel nacional, significó un dique de contención a la fuga de cuadros y base electoral al antipersonalismo, que en las hostiles condiciones del ambiente hubiera comprometido con mayor dureza a la estructura organizativa del partido radical.

⁴ Ricardo Caballero se había desempeñado como vice del gobernador Menchaca en la primer gestión radical, y Juan Cepeda acompañó también como vice al gobernador Lehmann llegando a ocupar el ejecutivo provincial cuando Lehmann renunció a su cargo a fines de la segunda década del siglo.

Pero la competitividad entre los dos partidos que apelaban a la denominación radical, amenazaba también, en sentido inverso, al antipersonalismo. Los elementos identitarios convocados desde el radicalismo, especialmente con la recurrencia a la abstención que remite a los míticos orígenes partidarios, son una seria amenaza para el antipersonalismo, cuyos cuadros intermedios y los militantes de la periferia partidaria pueden sentirse convocados por el discurso radical. La integración en el bloque de la Concordancia justista, le ofrece al antipersonalismo una excelente oportunidad para afirmar su estructura organizativa y enfrentar con ella a la hostilidad que puede significar ese perfil adoptado por el radicalismo. El calor ofrecido por la coaligada estructura nacional que se conforma al amparo del Estado puede compensar con comodidad, por otras vías, el drenaje de cuadros y reducirlo a la vez al mínimo. En otras palabras, si el activar la tradición —factor identitario— queda en territorio del “otro” radicalismo, el antipersonalismo se refugia en lo organizacional, en la estructura partidaria que conduce a los aparatos del Estado donde obtener los recursos materiales que garanticen la reproducción de la organización.

En la resolución de ese juego de ambigüedades que debe enfrentar el antipersonalismo, se cruzan entonces distintas variables: la actitud del gobierno militar de no intervenir a su favor en las elecciones del 31 en la provincia; el comportamiento asumido por el partido radical frente a esas elecciones, y la reorganización partidaria comandada por Alvear mientras sostiene la abstención electoral como metodología de lucha política; y las posibilidades de participar en el gobierno nacional a través de su inclusión en el bloque justista. Esta inserción nacional compensaba parcialmente la pérdida del gobierno provincial, y dejaba en un suspenso alentador a esa situación provincial que podía revertirse si se lograba imponer la intervención del gobierno nacional.

En ese marco, desde el momento mismo de conocerse los resultados electorales de 1931, el antipersonalismo definió una estrategia política frente al partido triunfante que no alteraría a lo largo de los tres años de gobierno. Una estrategia basada centralmente en una oposición total, que llegaba incluso a la obstrucción institucional, y que apuntaba centralmente a provocar la intervención del gobierno nacional. Controlando el bloque opositor en la legislatura local, el antipersonalismo santafesino podía aprovechar los conflictos internos del partido de gobierno para provocar situaciones manifiestas de ingobernabilidad que justificaran la intervención nacional.

En torno al radicalismo.

El radicalismo provincial llega a 1930 con una larga experiencia de gobierno y con una alta conflictividad interna. El proceso de reorganización partidaria iniciado a nivel nacional con la conducción de Alvear, se realiza bajo la presión y hostilidad del sistema instalado por el golpe uriburista, primero, y por los dispositivos de manipulación electoral con los que el justismo se prepara para capturar el gobierno, después. Bajo el liderazgo de Alvear el radicalismo comenzará

un proceso complejo entre las tendencias a la unidad y a la heterogeneidad constitutiva de las fuerzas que lo componen. La tendencia a la unidad es favorecida, precisamente, por la hostilidad del ambiente que amenaza la integridad partidaria y reúne al tronco yrigoyenista con muchos emigrados de la agrupación en la década del veinte bajo el común liderazgo de Alvear. La abstención electoral decidida como respuesta a la hostilidad oficial, activa las más caras tradiciones partidarias y optimiza las posibilidades de la reorganización partidaria, reforzando el aspecto identitario ante la ausencia de recursos materiales para distribuir. La figura de Alvear resulta por demás oportuna para contener a importantes sectores enfrentados a la dirección partidaria que había manejado los resortes partidarios hasta el golpe de 1930.

La combinación del liderazgo de Alvear con la abstención electoral resulta el mejor paraguas protector frente a la hostilidad del ambiente y a la presión de sus competidores del antipersonalismo, que pueden sí contar con recursos materiales para tentar a porciones importantes de la base electoral del radicalismo. En el ámbito local, esta combinación líder-metodología ayuda a contener el saqueo de cuadros partidarios y base electoral en un punto que no amenaza la sobrevivencia de la estructura partidaria.

Después de la "fuga" de 1931, cuando Ricardo Caballero y Juan Cepeda se encolumnan definitivamente en el antipersonalismo, el radicalismo define su organización como UCR Comité Nacional, a tono con la organización partidaria que se impulsa desde la conducción nacional. La conflictividad interna entre yrigoyenistas y antiyrigoyenistas no desaparecerá, pero en esta primera etapa la hostilidad del ambiente favorece la cohesión interna, fortalecida por las banderas identitarias a las que se acude para responder. Además, por las características del sistema de partidos en nuestro caso local, el radicalismo encuentra otras presiones hostiles que condicionan su accionar.

La abstención del radicalismo en las elecciones del 31 permite que el PDP y el antipersonalismo ocupen todo el escenario electoral. Como ya señalamos, en un principio las principales superposiciones en la base electoral se presentan entre el radicalismo y el antipersonalismo, especialmente por las abundantes zonas grises que existen en las fronteras partidarias dado el tronco originario. Sin embargo, a medida que el antipersonalismo se precisa como una fracción dentro del bloque justista, donde el radicalismo define al enemigo, se va estableciendo una frontera dura que será cada vez más difícil de saltar.

Con el PDP la situación es diferente. Si hasta 1930, ambos partidos han tenido carriles diferenciados de desarrollo, propio de los partidos opositores, la situación en los treinta confunde estos carriles estableciendo una relación en la que prima la competencia por la base electoral opositora. Es que, en la situación provincial, la democracia progresista compite con el radicalismo por el rol de oposición al gobierno de Justo, y lo hace desde el control del Estado provincial por lo que cuenta con un manejo importante de recursos para ampliar su base electoral.

Sin recursos materiales, frente a dos partidos que cuentan con ellos, el radicalismo refuerza en su accionar los aspectos más "ideológicos" para presen-

tarse como la verdadera oposición en términos que rememoran la antigua dicotomía de la *causa* contra el *régimen*. Si en el plano nacional la coincidencia en la oposición con el PDP podía resultar oportuna para enfrentar mejor al justismo, en el plano local la superposición de ambos partidos en un mismo rol podía afectar seriamente las fronteras que definen el campo de identidad de cada organización, lo que beneficiaría al PDP que desde el Estado provincial podía ofrecer mejor una alternativa a la política del gobierno nacional y definir así la agenda opositora desde su registro.

El nivel de institucionalización del PDP y del radicalismo, es lo suficientemente alto como para amortiguar la amenaza que puede significar para la sobrevivencia de las organizaciones partidarias la competencia entre ambas. Esta misma institucionalidad partidaria, asegura que ese dominio del que depende la entidad organizativa de cada partido no será "tocado" gravemente por la competencia. Sin embargo las zonas fronterizas al núcleo central del dominio, que sí pueden ser capturadas, al menos coyunturalmente, por el partido competidor, definen la capacidad electoral de la agrupación y sus posibilidades de alcanzar el control del Estado. Situación fundamental para poder garantizar por otros medios el sostenimiento en su red de esa base electoral.

En respuesta a esta situación de competitividad con el partido de gobierno en la provincia, el radicalismo adoptará una actitud opositora al gobierno de Molinas, aun cuando no cuenta con representación en la legislatura. Si en las elecciones del 31, con la abstención partidaria, un caudal importante de su franja electoral se desplazó hacia el PDP para impedir el triunfo de quien era percibido como el verdadero enemigo, desde el inicio mismo de la gestión de Molinas el radicalismo adoptará una cerrada postura de oposición al proyecto reformista del gobierno, en lo que venía a coincidir con el antipersonalismo.

Esta superposición del radicalismo y el PDP, que compiten en el rol de oposición al gobierno nacional, tendrá efectos posteriores, en nuestro segundo período, cuando la intervención del gobierno federal en la provincia prepare el terreno electoral para el antipersonalismo y la oposición de ambos partidos deba enfrentarse con la maquinaria del fraude electoral.

2. 1935-1937.

La intervención federal, tan anunciada durante los tres años de gobierno demoprogresista, se hace realidad en 1935, cuando el gobierno de Justo decide terminar la experiencia reformista santafesina y asegurar para la Concordancia el control electoral del distrito en las próximas elecciones nacionales.

Esta necesidad de subordinar un distrito tan importante para asegurar el control de la sucesión presidencial, es una condición necesaria pero no suficiente para explicar el cambio con respecto al escenario electoral de 1931. Es decir, por qué en 1935 es imprescindible que el distrito santafesino esté bajo control si en 1931 no había sido necesario para garantizar el éxito de la coalición justista nacional. Como reconoció Federico Pinedo, una de las principales figuras del

gobierno nacional, "fue la pérdida de la provincia de Córdoba por los Demócratas... lo que dio toda su significación y alcance a la intervención federal a Santa Fe" (Pinedo, 1946). Sin embargo, lo que Pinedo no nos dice, es por qué, a diferencia de 1931, es Santa Fe la ahora elegida para garantizar el resultado electoral, y no se utilizó ese recurso para consolidar a los demócratas cordobeses e impedir el avance del radicalismo sabatinista. Y las respuestas a estos interrogantes son de interés para nuestro análisis, en tanto nos remiten directamente al rol provincial y nacional de la democracia progresista y el antipersonalismo.

Con respecto a la democracia progresista, la intervención federal expresa la necesidad del justismo de ponerle límites a su protagonismo político, que crece a partir de la conjunción del rol parlamentario que Lisandro de la Torre desempeña en el Senado Nacional con la experiencia reformista llevada adelante desde el Estado santafesino. De la Torre proyectaba nacionalmente la experiencia santafesina, y ésta le daba a su líder la base política territorial gracias a la cual su discurso se alejaba de la recusación moral para presentarse como una alternativa política a la orientación que el justismo imprimía al Estado nacional. La candidatura de de la Torre para suceder a Molinas en la gobernación, se afirma a lo largo de 1935 como la mejor carta del PDP para recuperar la cohesión interna perdida a lo largo de la gestión de Molinas y asegurar a su indiscutido referente nacional un lugar privilegiado para insistir en su candidatura presidencial.

La relación del antipersonalismo santafesino con el gobierno nacional es el otro factor central para comprender la oportunidad de la intervención federal de 1935. Desde este lugar del análisis, la intervención federal se explica más por las relaciones internas del bloque justista, especialmente por la necesidad de mantener el delicado equilibrio entre las fracciones conservadores y las antipersonalistas. En este sentido, el antipersonalismo ha ganado el suficiente poder interno, como para impedir que el cuadro de 1931 vuelva a repetirse y que su fuerte base santafesina deba resignarse a no manejar el Estado provincial. Manuel de Iriondo, como ministro del gobierno nacional, firma la intervención a la provincia para dedicarse luego a preparar la conquista del Estado provincial que la intervención federal le garantizaba, mientras se afirmaba paralelamente a nivel nacional la candidatura de Ortiz para suceder a Justo.

Con la intervención se inicia en la provincia el período que hemos caracterizado como de transición, en el que se desanda el camino recorrido por el gobierno demoprogresista y se adoptan los dispositivos para garantizar el triunfo iriondista en las elecciones de febrero de 1937. Una transición hacia un funcionamiento muy diferente del sistema político, tanto por los dispositivos institucionales como por los cambios que se producen en el Estado. Y una transición, también, en el ambiente con el que se relacionan los partidos, que terminará por producir una importante modificación en la red interpartidaria y en las jerarquías entre los partidos que la componen.

En la redefinición del ambiente político en este período de transición, las constricciones institucionales son una pieza fundamental. Por una parte, la mar-

cha atrás en el proceso reformista se asienta en la anulación de la Constitución del 21, que el gobierno de Molinas había puesto en vigencia como primera medida de su gobierno y que ordenaba la agenda de la reforma promovida por su gobierno (Macor, 1993). Con el retorno a la antigua carta constitucional de principios de siglo, el poder ejecutivo provincial recuperaba el fuerte poder centralizador con respecto a la legislatura y a los municipios, lo que afectaba especialmente a las ciudades más importantes, como la capital y Rosario. Bajo el imperio de la constitución del 21, Santa Fe y Rosario habían ganado independencia del ejecutivo provincial, dictando sus propias cartas orgánicas que organizaban el poder municipal y eligiendo a sus autoridades legislativas y ejecutivas. De acuerdo a la Constitución de 1900 recuperada por la intervención federal, la designación de los intendentes volvía a ser facultad del ejecutivo provincial.

Por otra parte, las modificaciones institucionales de la intervención federal se orientan a la reorganización del escenario electoral en la provincia. En el poco más de un año de gestión, la intervención federal, controlada férreamente por el antipersonalismo local, ajusta la maquinaria electoral al detalle para garantizar el resultado de las elecciones de febrero de 1937.

El escenario electoral resultante, es muy diferente al de 1931. Ahora la maquinaria electoral, que el justismo ha extendido como modalidad a la mayoría de los distritos, le permite al antipersonalismo una cómoda campaña electoral centrada en destacar su fuerte inserción partidaria en el bloque oficial nacional, lo que le brindaría a la provincia el apoyo del Estado nacional para impulsar obras públicas de envergadura.

El radicalismo ha levantado su postura abstencionista, lo que en el marco provincial podría no significar una amenaza para el antipersonalismo. En la medida que el PDP y el radicalismo concurren por separado a las elecciones, la dispersión de votos opositores hace más sencillo el triunfo para el partido oficial. Y más importante aún, la competencia entre los dos partidos opositores debilita su capacidad para poner límites a la manipulación electoral, sobre todo en las zonas menos expuestas ante la opinión pública donde la maquinaria del fraude podía rendir mayor fruto con menor costo político.

Esta situación no era desconocida por la oposición, lo que motivó serios intentos de conformar una alianza electoral para enfrentar al oficialismo antipersonalista. El mismo Lisandro de la Torre, renuncia a su candidatura a gobernador con un documento público en el que convoca a la conformación de una alianza con el radicalismo. Sin embargo, el intento acuerdista fracasa a nivel provincial y los partidos opositores sólo logran unirse en unos pocos departamentos. La intransigencia del radicalismo en imponer los dos términos de la fórmula gubernativa de la alianza, habría decidido la suerte del intento (Piazzesi, 1996).

El radicalismo ha reingresado a la arena electoral desde 1936, y atraviesa una seria crisis partidaria por la situación del partido a nivel nacional. Aunque la participación electoral puede permitirle alcanzar algunas cargos legislativos y

con ellos una mínima estructura de recursos del Estado —con los que no contaba cuando se refugiaba en la bandera abstencionista—, los elementos que cohesionaban su base electoral en el período anterior desaparecen. Si el camino a la Casa Gris está bloqueado por el fraude electoral, nada le garantiza al radicalismo que los recursos materiales que pueda llegar a disponer gracias a su reingreso al sistema institucional, alcancen para compensar lo que se pierde por esa misma decisión.

La democracia progresista ha ejercitado por tres años el rol de partido de gobierno. La descomposición partidaria que la candidatura de de la Torre prometía venir a remediar, es consecuencia de la dinámica partidaria en el gobierno. La pérdida del poder, sin embargo, no recompone mágicamente el desmembramiento producido en su ejercicio. El PDP llega así al escenario electoral de 1937 con una extrema vulnerabilidad. Decidida la participación partidaria individual en la contienda, y sin la figura de de la Torre, la vulnerabilidad partidaria se reflejará en uno de los peores resultados electorales, lo que más allá del fraude que garantizaba el triunfo del antipersonalismo, le permitió al radicalismo ocupar un cómodo segundo lugar, ganando para sí el principal rol de partido opositor.

La percepción de la descomposición del PDP llevó seguramente a la intransigencia radical frente a la alternativa aliancista; pero la democracia progresista, más allá de la actitud inicial de de la Torre, tenía dificultades tan duras como las del radicalismo para ordenar al conjunto del partido tras la bandera acuerdista, aun antes que la postura radical con respecto a las candidaturas cerrara la última puerta. Ambos partidos, sin embargo, podían tener una firme certidumbre sobre la imposibilidad de detener la maquinaria que preparaba el antipersonalismo si decidían participar individualmente. Tal vez lo aprendido a lo largo de la década en otros distritos que ya habían probado el funcionamiento de la maquinaria del fraude electoral, habilitaba una imagen más pesimista y a medida que las elecciones se acercaban los dos partidos se resignaban a disputar el segundo lugar. Si el premio mayor estaba negado de antemano, la alianza carecía de sentido y el único premio atractivo residía en definir para sí el segundo lugar. Esta definición era en definitiva la más importante, si se trataba de sincerar el lugar de cada uno en el escenario electoral, que desde 1930 se había mezclado confusamente por la abstención radical.

Es el carácter competitivo que ha asumido la relación entre ambos partidos desde 1930, lo que resulta más gravoso a la hora de acordar un frente común que volvería aun más difusas las fronteras que separan las identidades partidarias. Como señala Panebianco, el partido competidor es el “único realmente peligroso y en todo caso mucho más peligroso que cualquier opositor, desde el momento en que, con sus pretensiones sobre el mismo territorio de caza, amenaza la identidad organizativa, generando de este modo una presión desestabilizadora para el partido... La alianza entre dos partidos competidores... crea a cada una de las dos organizaciones enormes problemas, puesto que amenaza la identidad organizativa de ambos” (Penebianco, 1995: 412).

La competitividad entre los partidos de oposición allana el camino para el antipersonalismo, que gracias al control del aparato estatal provincial se prepara a afrontar un escenario electoral previsible. Paralelamente, el antipersonalismo termina de procesar internamente los cambios afrontados en la primera mitad de la década. En esos años en que el Estado provincial le fue negado, el antipersonalismo logró una importante inserción en el justismo nacional, sobre todo de la mano de Manuel de Iriondo que en ese proceso termina de consolidar su liderazgo interno. Desde entonces, la hegemonía interna del iriondismo será sostenida, procesando sin sobresaltos para su autoridad las mutaciones intrapartidarias que provocará el manejo del Estado provincial.

3. 1937-1943.

La hegemonía interna del iriondismo se ratificará a lo largo de este último período, por su capacidad para encauzar los cambios que el ejercicio del gobierno —y las particulares formas que adopta— tiene para el partido oficial. En la primera mitad de la década, sin el control del ejecutivo provincial, se incorporaron al antipersonalismo cuadros importantes del radicalismo no contenidos por la reorganización partidaria y la abstención electoral. Con los recursos materiales que provienen del manejo del Estado, bajo su control en la segunda mitad de la década, el antipersonalismo iriondista está mejor dotado para avanzar sobre los “territorios de caza” de los partidos de la oposición.

Su transformación en partido de gobierno implica la atención de un ambiente de mayor complejidad que el que tenía en su anterior rol opositor. Sin embargo, a pesar de la conflictividad interna a la que no escapará el partido en el gobierno, el perfil gubernamental resultará eficaz para dominar ese ambiente, bajando así el nivel de incertidumbre partidaria. En la definición de ese perfil, tienen un lugar central las nuevas modalidades que el iriondismo imprime a la política gubernamental provincial, que sintonizan con las transformaciones del Estado nacional.

Precisamente, una de las características más significativas del período, es el fenómeno de creciente autonomización estatal. Desde nuestro ángulo de análisis, uno de los factores contribuyentes de esa mayor autonomía estatal, descansa en los dispositivos del fraude electoral. El fraude ayudaba a consolidar ese proceso estatal bajo la dirección de la élite conservadora, a la que protegía de la incertidumbre electoral garantizando su reproducción en la dirección del Estado. Como ha señalado Ricardo Sidicaro, la manipulación electoral permitía a la élite política una mayor independencia de los sectores socioeconómicos predominantes, y “acordaba mayor protagonismo a la dirigencia media del conservadurismo que extraía su poder de la política, remitiendo esa actividad a cadenas de intermediarios que, como ellos, también vivían de la política” (Sidicaro, 1995: 339).

En nuestro caso local, el iriondismo es el mejor exponente de esa élite política conservadora, que sobre el proceso de mayor autonomía y protagonismo estatal dominó al ambiente a partir de una particular combinación entre el

fraude, que garantizaba su continuidad en el Estado, y la obra pública, a través de la cual el gobierno encauzaba su acción política (Piazzesi, 1997; Sidicaro, 1995).

El proceso de ordenamiento interno para llegar con el partido cohesionado al escenario electoral del 37, estableció una importante participación de los sectores que habían abandonado el radicalismo en el 31. Caballero y Cepeda, los dos dirigentes más importantes de las fracciones radicales incorporadas al antipersonalismo, serán los candidatos para representar a la provincia en el Senado Nacional. El núcleo central del iriondismo se reservaba para sí el control exclusivo del ejecutivo provincial, por lo que dispondría a su arbitrio de los principales recursos materiales, fundamentales para el clientelismo político, que permitiría disciplinar a las fuerzas internas partidarias y avanzar hacia la base electoral de los partidos opositores.

Un punto central de la conflictividad interna del partido en el gobierno, pasa por el manejo de la relación provincia-nación y, más precisamente, por la relación con el bloque justista nacional. De esta relación con la coalición justista, se desprende la particular relación del sector iriondista con el conjunto del antipersonalismo local. El iriondismo se ha conformado como grupo, fundamentalmente, al calor de la coalición nacional, donde Iriondo ha construido aceitados lazos políticos con las fracciones conservadoras. En el seno del antipersonalismo local, en cambio, hay importantes sectores que no han abandonado completamente su tradición radical y se resisten a verse contenidos por la fracción iriondista de fuerte tradición conservadora.

Esta competencia entre las dos tradiciones, que está también presente en el gobierno nacional, determina una fuerte tensión interna en el nuevo partido de gobierno, comprometiendo la cohesión interna alcanzada. Sin embargo, con el ejecutivo provincial en sus manos, el iriondismo puede controlar con cierta comodidad la nueva situación. Aunque no termina de ordenar a su partido, el ejercicio del gobierno le permite encontrar los atajos con los que evitar que la conflictividad partidaria afecte la gobernabilidad y la capacidad de la élite gubernamental de reproducirse en el poder.

Por una parte, la centralidad de la política en la obra pública y el robustecido poder del ejecutivo en relación a la legislatura —gracias al retorno a la constitución de 1900—, concentraban la disputa política intrapartidaria en el manejo de los recursos materiales, sobre los que el gobernador y su gabinete tenían una capacidad de resolución indiscutida.

A la vez, jerarquizando la capacidad de intervención del Estado, especialmente a través de la obra pública, la política iriondista concentraba el poder decisor en el ejecutivo provincial. Desde ese lugar privilegiado, el aparato político iriondista puede salir a disputar la base electoral del radicalismo y el PDP. Por las modalidades que el iriondismo imprime a su política, esta competencia con los partidos opositores se da en un territorio elegido por el gobierno. Un territorio en el que la política aparece negada, ocultada, por actores sociales que ganan protagonismo bajo el amparo gubernamental que los elige como interlo-

cutores y destinatarios de la obra pública que impulsa. Vecinales, clubes, etc. son las instituciones privilegiadas por el gobierno, que transformando su política en administración define a sus interlocutores en la sociedad desde su rol de consumidores (Piazzesi, 1997).

En ese terreno de instituciones sociales donde la política se ejerce de manera encubierta, los partidos opositores tienen serias dificultades para competir con el partido oficial que reúne los recursos materiales provenientes del Estado provincial y del Estado nacional para responder a las demandas.

El PDP, desde su caída del gobierno provincial, ingresa en un cono de sombras, en el que se mantiene a lo largo de este período. Al fracaso electoral del 37, se le agrega la crisis partidaria que acompaña al ocaso político del de la Torre de los últimos años y su suicidio posterior en 1939. Por otra parte el partido comienza a ser vulnerable a las tentaciones ofrecidas por el iriondismo, especialmente en la ciudad de Rosario. La debilidad partidaria lleva incluso a promover la abstención electoral que se hace efectiva sólo en la primera elección a diputados nacionales convocada en el gobierno de Iriondo.

En los años finales de nuestro período, la democracia progresista ha abandonado ya su competencia con el radicalismo, resignada a ocupar el lugar de partido minoritario. En el marco de la crisis atravesada, esta estrategia parece apropiada para contener una base electoral más homogénea y estable, evitando que el juego de pinzas de los dispositivos de cooptación del iriondismo y la competencia del radicalismo, resulte fatal para la sobrevivencia de la organización.

Frente a ese PDP que parece regresar al monótono rol de partido minoritario que desempeñaba antes de 1930, el radicalismo termina por ocupar casi en exclusiva el lugar de la oposición. En una red interpartidaria competitiva, esta captura del lugar de la oposición arroja resultados positivos para la reorganización partidaria. El sostenido crecimiento del bloque de legisladores nacionales y la pérdida de competencia del PDP en el orden local, parecen confirmar el acierto de la estrategia concurrencista con la que el radicalismo volvió al ruedo político institucional. En nuestro caso, la reconquista de la base electoral perdida en manos del PDP en 1931, se hace evidente en todas las elecciones desde 1937 en adelante. Con relación al antipersonalismo, la consolidación interna del iriondismo aleja a cuadros importantes provenientes del tronco radical, y aunque son pocos los que pueden regresar al viejo partido, su "retiro" promueve la disponibilidad de su base electoral que será fácilmente capturada por el radicalismo.

En este cuadro de cierre, el sistema interpartidario encuentra ese punto de estabilidad característico de las redes construidas por partidos opositores que tienen bien delimitadas sus bases electorales —los territorios de caza— y no se rozan entre sí. El PDP, constreñido sobre su núcleo más central, que le alcanza sólo para ocupar el lugar de tercera minoría, pero, también, para sostener una estructura organizativa cohesionada que garantice su sobrevivencia partidaria. El iriondismo, que busca compensar lo perdido de base electoral tradicional por

la relación establecida desde el gobierno con los actores sociales que privilegia en su accionar, mientras sostiene la disposición a violentar la realidad electoral para reproducirse en el poder. Y el radicalismo, cuya reconquista de la base electoral perdida lo ubica en una situación expectante, que puede ser suficiente para competir con éxito con el partido de gobierno en elecciones transparentes, pero que no alcanza, todavía, para obligar al iriondismo a someterse a la democracia electoral.

Referencias bibliográficas:

- Macor, Darío (1993): *La reforma política en la encrucijada. La experiencia demoprogresista en el Estado provincial santafesino*. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.
- Macor, Darío (1995): "¿Una república liberal en los años treinta?", en Waldo Ansaldi et al (editores): *Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946*. Buenos Aires, Biblos.
- Malamud, Carlos (1997): *Partidos políticos y elecciones en la Argentina. La Liga del Sur (1908-1916)*. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Panebianco, Angelo (1995): *Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos*. Madrid, Alianza Universidad.
- Persello, Ana (1996a): *El radicalismo en crisis (1930-1943)*. Rosario, Fundación Ross.
- Persello, Ana (1996b): "El radicalismo santafesino entre 1930 y 1943", en Julio Melón y Elisa Pastoriza (editores): *Los caminos de la democracia*. Buenos Aires, Biblos.
- Piazzesi, Susana (1996): *El iriondismo santafesino en la década del treinta*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Documento de Trabajo Nº 5 del Programa de Estudios Interdisciplinarios de Historia Social.
- Piazzesi, Susana (1997): "Después del liberalismo: ¿un nuevo conservadorismo?. El iriondismo santafesino en la década del treinta", en *Estudios Sociales*, Nº 13, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.
- Pinedo, Federico (1946): *En tiempos de la República*. Buenos Aires, Ediciones El Mundo Forense.
- Sidicaro, Ricardo (1995): "Los conflictos entre el Estado y los sectores socioeconómicos predominantes en la crisis del régimen conservador (1930-1943)", en Waldo Ansaldi et al (editores); *Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946*. Buenos Aires, Biblos.